

Publicado en Level
UnitedWeDream.org
Oct 13, 2020

[Título en la imagen: La lucha para derretir ICE¹]

ABOLICIÓN PARA EL PUEBLO

Porqué estamos luchando por un mundo sin ICE

Bajo el amparo de la política antiterrorismo posterior al 11 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional ha desencadenado un ataque carcelario contra las familias y los niños inmigrantes

Este artículo es parte de Abolición para el pueblo, una serie de artículos que llegan a usted gracias a la asociación entre la firma editorial Kaepernick y LEVEL, una publicación de Medium para y sobre las vidas de Negres y personas de color. La serie de artículos, que comprende treinta ensayos y conversaciones para cuatro semanas, concluye que el control policial y las prisiones no son soluciones para las cuestiones que el estado considera como problemas sociales –y exige un futuro que ponga en primer lugar la justicia y las necesidades de la comunidad.

Autoras: *Cristina Jiménez Moreta y Cynthia García*

Nosotros los jóvenes inmigrantes y nuestras familias dejamos valientemente todo en nuestros países de origen para mudarnos a los Estados Unidos. Algunos de nosotros huimos de la pobreza, los golpes militares, la violencia y la guerra, mientras que otros, simplemente, quieren ir en busca de una vida mejor. Mientras nos adaptamos a un nuevo lugar, hemos experimentado algunas de las peores cosas que este país tiene para ofrecer: explotación laboral, robo de salarios, perfilamiento racial, miedo a la deportación y violencia policial. Pero como parte del movimiento de jóvenes inmigrantes en *United We Dream* [Unidos soñamos] (UWD por sus

¹ El título de este artículo plantea un juego de palabras entre el verbo en inglés “melt” (derretir) con la sigla ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y la palabra “ice” en inglés y que en español se traduce como “hielo”.

siglas en inglés), también hemos experimentado el poder de la gente que se une, actúa y consigue un cambio.

En las raíces de nuestro movimiento se encuentra la idea de que tenemos que proteger y defender nuestras familias de la deportación y luchar por nuestro derecho a la educación superior. Desde el inicio de la década de los 2000, decenas de miles de estudiantes indocumentados se graduaron de la escuela secundaria cada año. Todos nosotros vivíamos con el miedo a la deportación y la inminente posibilidad de la separación de nuestras familias mientras enfrentábamos obstáculos para acceder a la educación superior, la explotación laboral y un futuro incierto.

Este miedo a la deportación se acentuó después del 11 de septiembre de 2001, cuando vimos cómo el cumplimiento del régimen migratorio y la seguridad nacional se mezclaban de formas nuevas y preocupantes. En nombre de la lucha contra el terrorismo, el presidente George W. Bush creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) en 2002, dentro del cual la inmigración y los inmigrantes se consideraban asuntos de seguridad nacional. Esto no sólo condujo a un aumento del perfilamiento racial y la xenofobia, sino que, como resultado, agentes policiales locales y federales se enfocaron en mayor medida en los musulmanes, los inmigrantes negros y a los inmigrantes de color no musulmanes, lo que a menudo condujo a su detención y/o a la deportación.

A nivel nacional, miles de personas se verían implicadas en el cumplimiento del régimen migratorio posterior al 9/11 ya que produjo una infraestructura que apoyaba los esfuerzos de los agentes policiales estatales y federales para criminalizar, detener y deportar inmigrantes. Dentro de esta infraestructura, se llevó a cabo el incremento en los perfilamientos raciales, una mayor vigilancia de las comunidades negras y de color, una mayor militarización de la frontera entre los México y los Estados Unidos, y la implementación de políticas federales racistas como el Sistema de seguridad nacional de registro de entrada y salida que se enfocó en inmigrantes de veinticinco países.

Entre las miles de personas que se vieron afectadas por el régimen posterior al 9/11 se encontraba Kamal Essaheb y Walter Barrientos en Nueva York y Marie

Gonzalez en Missouri –tres jóvenes inmigrantes indocumentados que fueron amenazados con la deportación.

Sus casos de deportación impulsaron algunos de nuestros primeros esfuerzos que nos llevarían a conformar UWD en 2008. Juntos, junto con activistas y organizadores de todo el país, movilizamos a la gente para que escribiera cartas y llamara por teléfono a los funcionarios electos para exigir al gobierno que permitiera que Kamal, Walter y Marie permanecieran en Estados Unidos, lo que nos valió una gran atención de los medios de comunicación. Aunque los padres de Marie fueron deportados, nuestros esfuerzos organizativos detuvieron las deportaciones de Marie, Walter y Kamal. Este fue un momento agri dulce en nuestra lucha para la protección de los inmigrantes, ya que puso de manifiesto el impacto humano del cumplimiento del régimen migratorio, no sólo al deportar a los inmigrantes, sino también al separar las familias.

Desde el inicio de la década de los 2000, decenas de miles de estudiantes indocumentados se graduaron de la escuela secundaria cada año. Todos nosotros vivíamos con el miedo a la deportación y la inminente posibilidad de la separación de nuestras familias mientras enfrentábamos obstáculos para acceder a la educación superior, la explotación laboral y un futuro incierto.

Este momento también nos enseñó que las personas que se encuentran más cerca al dolor están más cerca de las soluciones que nuestras comunidades necesitan. En aquel momento, los inmigrantes indocumentados que públicamente lucharon contra las deportaciones eran algo insólito. Sin embargo, desafiando la sabiduría convencional, los jóvenes indocumentados y sus familias lanzaron campañas para compartir sus historias, presionar a aquellos con poder de decisión y conseguir que se redujera la deportación. Estaba claro que nuestro movimiento tenía el poder de generar un cambio real.

Esto fue aún más evidente en 2012, cuando se creó el programa de Acción diferida para los llegados en la infancia (DACA por sus siglas en inglés) como resultado

directo de nuestros esfuerzos. Bajo la administración de Obama, los programas de control migratorio y la colaboración entre el ICE y la policía local se ampliaron agresivamente, lo que llevó a un aumento en el número de inmigrantes detenidos y deportados incluso por infracciones menores, como las de tráfico. Bajo el cálculo político de que la intensificación del control migratorio atraería a los miembros del Congreso de ambos partidos a la mesa de negociaciones, el gobierno de Obama deportó a un número récord de inmigrantes de los Estados Unidos. Durante los ocho años de mandato de Obama, más de tres millones de personas y familias fueron deportadas y separadas de sus seres queridos. Su administración no logró la aprobación de reformas legislativas en materia de inmigración, mientras que el régimen de control migratorio aumentó constantemente en recursos y poder.

Como organizadores y personas directamente afectadas, reconocimos que este era un momento para influir: al compartir nuestras historias, podíamos presionar al presidente Obama para que tomara alguna medida. Nuestro movimiento creó con éxito las condiciones que llevaron al presidente Obama a implementar DACA, que protegió a cerca de 800.000 jóvenes inmigrantes de la deportación. El programa sigue siendo el avance político más importante y la victoria en materia de inmigración en casi tres décadas. Al compartir nuestras historias y liderar la acción directa y la desobediencia civil para sacar a los agentes de ICE de nuestras comunidades, reconocimos el poder que teníamos para ganar protección contra la deportación a través de cambios legislativos.

Esta y otras victorias han fortalecido nuestro movimiento y han traído esperanza a nuestras comunidades –pero como se ha visto, las detenciones en masa y las deportaciones no se han detenido. ICE y la Oficina de aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos (CPB por sus siglas en inglés), las dos agencias principalmente responsables del control migratorio, han continuado llevando a cabo una agenda racista y supremacista, que persigue a los inmigrantes –particularmente a los inmigrantes Negres y de color– para su detención y deportación con poca supervisión o responsabilidad. Está claro que nuestra lucha no ha terminado.

Año tras año, el fracaso en la mesa de negociación de la política de inmigración ha sido seguido por la aceptación casi silenciosa de los crecientes presupuestos anuales para ICE y CBP y su creciente autoridad. Las dos agencias emplean a más

de 80.000 personas, con un enorme presupuesto de 25.300 millones de dólares en 2020 (8.400 mil millones para ICE y 16.900 mil millones para el CBP), que es mucho más que la suma del de todas las agencias federales encargadas del control y el cumplimiento de la ley. Sin embargo, mientras que los recursos para estas instituciones (ICE y CBP) han aumentado, las escuelas y los hospitales en nuestras comunidades a menudo siguen sin fondos y sufren la falta de apoyo federal.

El poder de ICE y CBP para deportar, construido por las administraciones de ambas orillas políticas, se ha desatado completamente bajo la administración de Trump. El ICE y la CBP han llevado a cabo numerosos ataques contra las comunidades de inmigrantes, incluyendo la colocación de niños en jaulas; la persecución de inmigrantes en sus lugares de trabajo, escuelas, lugares de culto, hospitales y hogares; y el derribo de puertas y la separación forzada de padres e hijos. Pero la administración Trump no se ha detenido ahí.

A lo largo de sus cuatro años en el cargo, Trump intentó constantemente desmantelar DACA, reducir los programas de refugiados y detener y deportar a un número cada vez mayor de inmigrantes. Bajo su administración, se ha visto a cincuenta y siete inmigrantes, incluidos niños, morir en campos de detención; la deportación de una mujer que sirvió como testigo clave en las denuncias de asalto y acoso sexual dentro de las instalaciones del ICE; informes de histerectomías forzadas que se realizaron a mujeres inmigrantes, y ocho inmigrantes que han muerto por Covid-19 mientras estaban bajo custodia del ICE.

Frente a estos y otros ataques, UWD ha luchado incansablemente para proteger y exigir justicia para las comunidades de inmigrantes. En la última década, UWD ha luchado en nombre de más de 1.000 personas amenazadas con la deportación. Los líderes comunitarios de UWD recibieron cientos de llamadas semanales en nuestra línea telefónica gratuita “Migra Watch” (reportando a la migra) y le contestaron a las familias inmigrantes que informaban de interacciones con agentes de ICE y CBP, y que necesitaban ayuda cuando sus amigos y seres queridos se enfrentaban a la detención y la deportación.

Por ejemplo, Tania, sobreviviente de cáncer en Georgia, fue llevada a un campo de detención tras un control de tránsito. Los agentes de ICE mantuvieron a Tania encerrada durante cuatro meses, lejos de sus hijos y del tratamiento contra el

cáncer que necesitaba para vivir. Asimismo, UWD ha luchado en nombre de personas como Héctor, detenido por tener la matrícula caducada, y de estudiantes de secundaria como Dennis, al que los agentes de ICE se llevaron a rastras tras denunciar que sufría acoso escolar.

Nuestra historia y el momento actual nos han demostrado que el riesgo de sufrir daños, detenciones y deportaciones siempre existirá allí donde la policía y los agentes federales se encuentren. Nuestra visión es que todas las personas de este país, independientemente de su situación migratoria, puedan vivir libremente, con plena dignidad, y prosperar. Para conseguirlo, debemos unirnos en la lucha más amplia contra la supremacía blanca y el racismo que están arraigados en los sistemas interconectados de vigilancia policial, el encarcelamiento masivo y control migratorio que, por su diseño, persigue a los inmigrantes y los deshumanizan aún más, especialmente a las personas de color.

Al mismo tiempo, también debemos reconocer el borramiento histórico de las Negres y les indígenas de las conversaciones sobre inmigración y centrar a estas comunidades en nuestra lucha por la justicia para los inmigrantes. El legado de genocidio y colonialismo de Estados Unidos no puede ignorarse, ya que su impacto se sigue percibiendo hoy en día. Hemos visto morir a inmigrantes indígenas como resultado directo de la incapacidad del sistema de inmigración estadounidense de proporcionar servicios de interpretación y traducción a los inmigrantes que hablan lenguas indígenas. En 2018, dos niños de comunidades indígenas mayas de Guatemala murieron bajo la custodia de CBP tras no recibir la atención médica adecuada, ya que los servicios médicos no se tradujeron en Q'eqchi' y Chuj, las dos lenguas indígenas que hablaban los niños y sus familias.

Por eso, durante la última década, los líderes de UWD han hecho de la exigencia de la abolición y la justicia para todos el centro de nuestra visión, trabajo y estrategia del movimiento. Basándonos en nuestra experiencia de vida, sabemos que ICE y la policía local trabajan juntos para perfilar racialmente a los inmigrantes. Para muchos en nuestras comunidades, un control de tráfico o cualquier otro contacto con la policía local es el primer punto de entrada en el proceso de deportación.

Por lo tanto, cuando pedimos la abolición de ICE, también estamos pidiendo la abolición del control y la vigilancia en todos los niveles y de los sistemas que la apoyan, desde los centros de detención hasta las prisiones. La abolición de ICE está intrínsecamente ligada a la abolición de todas las demás formas de control, vigilancia y de encarcelamiento. Por lo tanto, el UWD está inequívocamente con el Movimiento por las Vidas Negras y sus demandas de desfinanciación de la policía, porque sabemos que la policía, el ICE y la CBP trabajan juntos para perseguir desproporcionadamente a inmigrantes Negres y de color. También sabemos que las mismas personas que se benefician del encarcelamiento masivo de personas Negres y de color nacidas en Estados Unidos también se benefician de la detención y deportación de inmigrantes.

Estamos comprometidos con una travesía de por vida hacia la justicia racial, de género y económica. Con cada victoria, nuestro sentido de lo que es posible debería crecer y nuestra comprensión de las vulnerabilidades de nuestros adversarios debería profundizarse. Un mundo donde nuestras comunidades no tengan que vivir con el miedo a la deportación y la detención es posible. Un mundo en el que nosotros y otros miembros del movimiento hayamos abolido el ICE –y donde la seguridad, la salud, la educación y el bienestar de nuestras comunidades sean una prioridad. Hemos sido testigos y hemos participado en un movimiento de personas indocumentadas que han transformado las políticas y las leyes de inmigración con una visión audaz de la libertad y la dignidad para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Este movimiento ha demostrado que cuando seguimos el liderazgo y la visión de los más cercanos al dolor y la injusticia, un mundo nuevo es posible.

. . .

Cynthia García es cuir, indocumentada que vive en Oklahoma City. Se desempeña como gerente de campañas nacionales para la protección de la comunidad en United We Dream (UWD por sus siglas en inglés) donde dirige una línea telefónica de apoyo a nivel nacional para los inmigrantes cuyos miembros de la familia han sido raptados por los agentes de ICE y les enseña cómo organizarse y luchar. La propia Cynthia está protegida de la deportación gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

Cristina Jiménez Moreta es una líder comunitaria, estratega y luchadora por la libertad, cofundadora de United We Dream (UWD por sus siglas en inglés). Cristina emigró a Queens, Nueva York, desde Ecuador, con su familia a los 13 años buscando una vida mejor, creció indocumentada. Es la antigua directora ejecutiva de UWD. Bajo su liderazgo, UWD se convirtió en una poderosa red de base de 800.000 miembros en 28 estados.